

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

*Medellín, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)*

Dentro del proceso ejecutivo conexo laboral, propuesto por el señor **GUSTAVO ADOLFO CASTRILLÓN RESTREPO** contra la empresa **ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA**, procede la corporación a resolver el recurso de apelación formulado por los apoderados judiciales de las partes, en contra de la decisión adoptada mediante proveído interlocutorio del 30 de julio de 2021 por la juez de la ejecución, a través del cual se resolvieron las excepciones de mérito dentro de este proceso, y se ordenó seguir adelante parcialmente con la ejecución, y en el cual se decretó cumplida la obligación de hacer impuesta a la empresa ejecutada (reintegrar al trabajador).

Esta decisión fue discutida, deliberada y aprobada mediante **ACTA Nro. 046** por los integrantes de esta sala, Dres. LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL y ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, y la suscrita MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO como ponente.

**ANTECEDENTES**

Mediante auto del 13 de junio de 2017 (PDF 11 del expediente digital), este colegiado resolvió apelación contra el mandamiento de pago, y decidió CONFIRMAR el auto del 13 de octubre de 2015, dictado por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín. La ejecución se ordenó en los siguientes términos:

***“LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por la vía ejecutiva laboral a favor del señor GUSTAVO ADOLFO CASTRILLÓN RESTREPO identificado con CC 71.083.233 y en contra de la sociedad ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA***

**CON NIT 900.306309-1** representada legalmente por el señor Lombardo Paredes Arenas o quien haga sus veces por los siguientes conceptos y obligaciones:

- *Por la obligación de Hacer consistente en Reintegrar a GUSTAVO ADOLFO CASTRILLÓN RESTREPO identificado con CC 71.083.233 en dicha empresa, sin que haya solución de continuidad, en los términos ordenados por el Tribunal superior de Medellín en concordancia con la Corte Constitucional.*
- *Pagar todas las prestaciones sociales legales y extralegales que se hayan causado desde el 21 de diciembre de 2004 hasta la fecha efectiva de su reintegro, las cuales se calcularán una vez ocurra su reintegro*

*Negar mandamiento de pago por las demás pretensiones, por lo expuesto en la parte motiva... ”.*

Luego de que se surtiera la respectiva notificación del auto que libró mandamiento de pago, la empresa ejecutada propuso excepciones al interior del proceso ejecutivo.

### **DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA**

En audiencia pública celebrada el día 30 de julio de 2021, la Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín resolvió: *i)* Declarar cumplida la obligación de hacer consistente en reintegrar al señor GUSTAVO ADOLFO CASTRILLON RESTREPO por cuenta de ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA, hoy GRANCOLOMBIA GOLD SEGOVIA – Sucursal Colombia; *ii)* Declaró probada la excepción de PAGO, en torno a la suma de \$59.178.359 por concepto de salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir entre el 21 de diciembre de 2004 y el 12 de abril de 2011; *iii)* Ordenó seguir adelante la ejecución en contra de la empresa ejecutada, por las sumas de **\$1.690.200** a título de saldo insoluto de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de percibir entre el despido el 21 de diciembre de 2004 y el reintegro (1º de junio de 2011) y por la suma de **\$17.308.700**, a título de raciones correspondientes al demandante, liquidadas entre el 21 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2011, día anterior al reintegro; *iv)* Condenó en costas del proceso ejecutivo a la empresa ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA, hoy GRANCOLOMBIA GOLD SEGOVIA – Sucursal Colombia, fijando como agencias en derecho la suma de **\$1.899.890** en

favor del ejecutante y, v) Requirió a las partes para presentar la liquidación del crédito respectiva.

Los argumentos en que fundó su decisión partieron de tener en cuenta que: El actor confesó en interrogatorio de parte que, en efecto, fue reintegrado el día 1º de junio de 2011 por ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA, que recibió de parte de la FRONTINO GOLD MINES un pago por \$61.847.199 por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 21 de diciembre de 2004 al 12 de abril de 2011 y que ha recibido de ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA el pago de salarios y prestaciones sociales legales, aunque desconociendo la legalidad de dichos pagos manifestando que no se le han reconocido los beneficios propios de la convención colectiva ni el salario al que tendría derecho.

Respecto al interrogatorio de parte del representante legal de la ejecutada, destacó confesión en el sentido de que ni ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA ni GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA – Sucursal Colombia le han pagado a GUSTAVO ADOLFO CASTRILLON RESTREPO los beneficios propios de la convención colectiva.

Resaltó los dos dictámenes periciales practicados al interior del proceso, los cuales fueron sustentados por los expertos, en los que se abordó ampliamente el tema de las raciones reclamadas.

A efectos de resolver las excepciones de PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN y CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE HACER, tuvo en cuenta el artículo 442 del Código General del Proceso, en cuanto en procesos ejecutivos derivados de una sentencia de condena únicamente pueden formularse las excepciones de PAGO, COMPENSACIÓN, CONFUSIÓN, NOVACIÓN, REMISIÓN, PRESCRIPCIÓN o TRANSACCIÓN, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia.

Verificó que ZANDOR CAPITAL SA COLOMBIA reintegró al demandante desde el 1º de junio de 2011 para desempeñar sus labores como obrero de mina y que, al momento de ser reintegrado, se le pagó por parte de la ya extinta

FRONTINO GOL MINES LIMITED, desde el 21 de diciembre de 2004 y hasta el 12 de abril de 2011, los siguientes conceptos:

- Por cesantías \$3.710.808.
- Por intereses a las cesantías \$429.025.
- Por primas de vacaciones \$2.226.484.
- Por primas de servicio \$3.710.808.
- Por salarios \$45.167.800.
- Por indemnización legal \$2.668.840.
- Por prima de antigüedad \$313.664.
- Por aguinaldo \$1.764.366.

Adujo que en los documentos glosados en las páginas 82 y siguientes del PDF 3 se encuentran los comprobantes de pago realizados al demandante por ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA, a partir del 1 de junio de 2011.

Hizo hincapié en que la pasiva no demostró haber pagado al señor GUSTAVO ADOLFO CASTRILLON RESTREPO en su totalidad los conceptos por los que se libró mandamiento de pago, comprendidos entre el 13 de abril y el 31 de mayo de 2011. A tal efecto, tomó en cuenta el último salario devengado por el señor CASTRILLÓN RESTREPO para la fecha del despido en diciembre de 2004, equivalente a **\$588.120** y aclaró que, conforme a la sentencia que sirve de base a la ejecución, el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido se debía realizar con el salario vigente para la fecha del despido, sin incremento salarial alguno, precisando asimismo que la sentencia tampoco ordenó el pago de aportes a la seguridad social.

Luego de haber realizado los cálculos, concluyó que los salarios que debieron cancelarse al demandante ascienden a \$45.461.676, en contraposición al monto inferior de \$45.167.800 pagado. En cuanto a las cesantías, indicó que las mismas ascendían a \$4.134.813 y no a la suma de \$3.710.808 que se pagó; en cuanto a los intereses a las cesantías \$475.300 y no \$429.025 como se desembolsó; en tratándose de las primas legales de servicio calculó que debió pagarse \$4.134.813, en contraposición a \$3.710.808. Haciendo los cálculos, explicó que, a

título de prima de vacaciones, como prestación extralegal, se le debió pagar al actor la suma de \$2.273.084 y no la de \$2.226.484.

Con relación al aguinaldo, como otra de las prestaciones convencionales, concluyó que el valor pagado debió ser \$1.886.885 y no la suma de \$1.764.366. Lo propio hizo con la prima de antigüedad (cláusula 30 de la convención colectiva: La empresa reconocerá 3 días de salario básico cuando el trabajador tiene de 3 a 5 años de servicio, 5 días de salario básico cuando el trabajador tiene de 5 a 10 años de servicio, 7 días de salario básico cuando el trabajador tiene de 10 a 15 años de servicio, 10 días de salario básico cuando el trabajador tiene de 15 a 20 años de servicio, 12 días de salario básico cuando el trabajador tiene de 20 a 25 años de servicio, 15 días de salario básico cuando el trabajador tiene de 25 a 30 años de servicios y 20 días de salario básico cuando el trabajador tiene de 30 años de servicios en adelante. Pago anualizado, no constitutivo de salario), la cual consideró que no se debió pagar por \$313.664, sino por la suma de \$607.724. Las vacaciones, liquidadas con el criterio de la convención colectiva (cláusula 28 de la Convención Colectiva de Trabajo), las cuantificó en \$1.894.237 y no en lo que pagó la empresa: por \$1.855.404.

Como reajuste total, encontró un valor adeudado de \$1.690.200.

Para negar la equivalencia económica de las raciones reclamada por la activa, se apoyó en que, si bien esas raciones se encuentran incluidas en el artículo 75 de la Convención Colectiva (“La empresa se compromete a vender a sus trabajadores los siguientes artículos alimenticios en las cantidades y precios que a continuación se enumeran con el fin de avalar su costo comercial actual en favor de ellos: A. Ración para los trabajadores de la empresa con excepción... la cual será vendida al precio de \$3 con 16 centavos, distribuido en la forma en que a continuación se indica...”. B. Ración para los familiares del trabajador con excepción del aceite... a precio de \$3 con 3 centavos distribuidos en la forma que a continuación se indica... C. La entrega del aceite se hará en las fechas que indique el departamento de negocios. Si el trabajador no reclama en las fechas indicadas, podrá hacerlo cualquier día después de adquirir el derecho. El aceite se entrega en la siguiente forma...), destacando que, en el expediente no hay ninguna prueba que denote que al actor se le han pagado estas raciones, y existiendo incluso

confesión del representante legal de la ejecutada en el sentido que no se han pagado, no obstante, adujo que los dictámenes periciales rendidos al interior del proceso, y a propósito del dictamen del PDF 13 del expediente, existe una proyección de cálculo del valor de las raciones entre los años 2004 y 2020. La Juez desestimó este dictamen por contener errores, empezando porque no se corresponde a los extremos temporales específicos. El principal defecto que le encontró fue haber calculado valor de productos buscando en internet los precios promedio de los productos en el mercado, absteniéndose de acudir a medios oficiales estadísticos (DANE) y siendo muy subjetivo, además del alejamiento de la cláusula convencional en que habría incurrido, por no mencionar la no correspondencia de cálculo entre los promedios familiares de consumo por semana y número de kilos y libras en promedio.

Con relación al segundo dictamen (PDF 31), presentado para controvertir el primero, encuentra correctamente sustentado el precio promedio de los productos en el mercado, al haber sido extraído las constantes de cálculo del Sistema de Información de Precios de Alimentos y Abastecimientos (SIPSA), además de haber tomado extremo temporal hasta el año 2012, en atención al rango temporal que cubre la respectiva temporada laboratorio de análisis. Este dictamen calculó el valor de lo adeudado por este rubro por \$16.643.240 al trabajador y no a su grupo familiar, a título de raciones dejadas de pagar entre el 21 de diciembre de 2004 y el 1º de junio de 2011.

Del análisis de la prueba pericial y conforme a las reglas aplicadas a su análisis concluyó que el valor diario de las raciones ascendió a \$8.651, y mensual de \$259.554 para diciembre de 2012. El segundo dictamen le ofreció credibilidad a la Aquo, y se constituyó en la fuente de su decisión. Una de las cuestiones más puntuales que la llevó a acoger el segundo dictamen se basó en que el mismo marca una diferencia con el primero, en cuanto el segundo discrimina correctamente todos los conceptos y resultados.

En cuanto a las raciones que le correspondían a su familia, destacó la juez de la ejecución que la parte demandante no hizo el más mínimo esfuerzo para probar la composición del grupo familiar del trabajador, para así contabilizar un

rubro integral de raciones, inactividad probatoria que le valió el análisis de la forma de probar en el proceso bajo exigencias ad *sustanciam actus*, allí donde se encuentran involucrados estados civiles de las personas y sus beneficios del estado civil de las mismas y la ausencia de los registros correspondientes. Todo este análisis lo hizo al margen de consideraciones sobre el título ejecutivo complejo.

Concluyó la juez que la entidad ejecutada no tiene razón al haber alegado un pago total de la obligación, ya que persiste algunos valores impagados, compuestos por sumas de reajuste y las del equivalente en dinero de las raciones en favor del trabajador, que no de su grupo familiar, con su naturaleza compensatoria propia. Así, continuó pertinente ordenar continuar con la ejecución.

El valor concreto de la suma por continuar ejecutando surgió de tener en cuenta el interregno 14 de abril al 31 de mayo de 2011, como periodo en el cual se adeudan las raciones, equivaliendo el mismo a la suma de \$390.474, para un gran total de \$17.308.700.

Así, declaró pago parcial por la suma de \$59.178.359, suma que equivale a salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir entre el 21 de diciembre de 2004 al 12 de abril de 2011, suma que le pagó al demandante la FRONTINO GOLD MINES LIMITED, sin imputar como pago en este proceso ejecutivo la suma de \$2.668.840 que corresponden a la indemnización por despido, teniendo en cuenta que en el título ejecutivo no fue autorizada la compensación, además que dicha excepción no fue propuesta. Ordenó continuar la ejecución por la suma de \$1.690.200 a título de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de percibir entre el despido el 21 de diciembre de 2004 y el reintegro (1º de junio de 2011) y por la suma de \$17.308.700, a título de raciones correspondientes al demandante, liquidadas entre el 21 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2011. Se declaró asimismo cumplida la obligación de hacer del reintegro del señor demandante. Le impuso condena en costas a la empresa ejecutada, en favor del ejecutante, fijando como agencias en derecho la suma de \$1.899.890.

## **RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS EN CONTRA DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

La decisión fue recurrida por ambas partes.

Apelación de la parte ejecutante: Se opuso a la conclusión de la juez de haber declarado cumplida la obligación de hacer del reintegro, argumentando que, según lo ordenado por el Tribunal Superior de Medellín, el reintegro debía darse en las mismas condiciones que gozaba el actor al momento del despido y según lo confesado por la empresa demandada esta no ha reconocido en múltiples aspectos la convención colectiva de trabajo desde el año 2011 en favor del trabajador, en múltiples aspectos (salarios, prestaciones, raciones y el tema de seguridad social). A partir de esta circunstancia, considera que la decisión de primera instancia, de tener por cumplida la obligación de hacer de reintegrar en las mismas condiciones, desconoce la orden judicial que se está ejecutando. Agregó que, al representante legal de la empresa se le preguntó si en algún momento había denunciado la convención colectiva de trabajo, y manifestó que no, concluyendo que se está desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional T-954 que declaró la sustitución patronal entre la empresa extinta FRONTINO GOLD MINES LIMITED y la actual empresa, haciendo énfasis en que la convención colectiva se ha venido prorrogando automáticamente en el tiempo, según los preceptos que establece el Código Sustantivo del Trabajo y según la prórroga automática que la misma convención contempla.

También reprochó el salario que se tuvo en cuenta para liquidar los conceptos prestacionales tenidos en cuenta por la A quo y, al efecto indicó que en el folio 45 de la demanda aparece el comprobante de pago Nro. 47868 de 2004, correspondiente a la década 34 (en el entendido que los pagos eran decadales) del mes 12 del año 2004, donde por 56 horas trabajadas al actor se le canceló \$137.229. También hizo referencia al comprobante Nro. 51304 de la década 35, por 54 horas laboradas, al trabajador se le pagó \$156.833, y dice que lo mismo ocurre con las colillas de pago aportadas y que obran a folios 894, donde hay dos comprobantes, el Nro. 17441 del mes 4 del año 2004 correspondiente a la década 11 por 80 horas laboradas donde se devengó \$208.867. Se refirió al folio 897 donde se encuentra



la historia laboral expedida por COLPENSIONES, en la que se observa que el ingreso base de cotización para el año 2004 era por **\$796.800** mensualmente, por lo que insistió en que la liquidación de prestaciones sociales, al momento del reintegro, debió por lo menos tener en cuenta las fórmulas que establece la convención colectiva y los incrementos de actualización año a año.

Indicó que, si bien está claro que los jueces ordinarios no dijeron expresamente que estos salarios debían incrementarse, sino que fue una condena en abstracto, era completamente determinable. Razonó que, cuando estamos hablando de un reintegro sin solución de continuidad, la ficción jurídica que debe hacerse debe apuntar a que el despido nunca existió y que todos los salarios y las prestaciones sociales legales y extralegales se deben reconocer conforme lo establece la convención colectiva y además, teniendo en cuenta los aumentos reconocidos y/o decretados periódicamente, siendo consecuente con el hecho de que la convención colectiva se ha venido renovando en el tiempo por la figura de la prórroga automática.

Hizo mención a pronunciamientos jurisprudenciales, sobre todo del Consejo de Estado, conforme a los cuales la liquidación debe realizarse teniendo en cuenta los aumentos que año a año se hayan decretado con respecto al cargo en cuestión y que hubieren sido aplicables al trabajador.

En esta misma dirección argumentó que la sustitución patronal decretada por la Corte Constitucional no extingue la convención colectiva, es decir que la misma no solo debe generar efectos hasta el año 2011, sino que en virtud de la prórroga automática debe extenderse en el tiempo. Mencionó que el Código Sustantivo del Trabajo establece que, si desaparece la organización sindical y el trabajador continúa prestando un servicio, la convención no desaparece, o por lo menos se mantiene hasta que el empleado se retire de la empresa.

Específicamente se refirió a las RACIONES, de las cuales indicó que las mismas no pueden contabilizarse y monetizarse solo hasta el año 2011, ya que ello significaría negarle a la convención colectiva los efectos que tiene en la actualidad. Sobre este mismo tema destacó que, si bien no se aportaron las pruebas que demuestran el estado civil de los integrantes de la familia del actor, en la

contestación de las excepciones por parte de la empresa ejecutada se aportó un certificado por medio del cual se afilió al ejecutante y a su grupo familiar a la seguridad social, donde aparece el grupo familiar del actor.

También destacó que, revisada la historia laboral en COLPENSIONES, la sociedad ZANDOR CAPITAL no acredita pagos a la seguridad social del actor sino desde el año 2016, es decir que no existen pagos a la seguridad social desde diciembre de 2004 hasta enero de 2016, omisión que estima determinante para que se concluya que no existe un cumplimiento efectivo del reintegro ordenado en sede ordinaria.

Indicó que los salarios pagados por ZANDOR CAPITAL S.A. al señor GUSTAVO ADOLFO CASTRILLON RESTREPO desde el 1° de junio de 2011 no se corresponden con el salario con el que el trabajador contaba al momento del despido, ya que, a su juicio, si se revisan los archivos aparecen salarios quincenales de \$294.000 y aparecen descuentos en materia de seguridad social, cuando la convención colectiva de trabajo establece que la empresa debe pagar el 100% de la seguridad social. Puso de presente que en esos recibos de pago aparecen deducciones por \$49.400 y otros valores, aspectos que, sumados, le llevan a indicar que la obligación de reintegrar al demandante en las mismas condiciones no se ha cumplido.

Se duele que, en todas las colillas de pago que se evidencian en el expediente desde el año 2011, no aparece el pago de ningún concepto convencional. Añadió que el auto que libró mandamiento de pago lo hizo de manera abstracta pero perfectamente determinable.

Solicitó se revoquen los aspectos de inconformismo.

Apelación de la parte ejecutada: Su inconformismo con la providencia recurrida fue específicamente con el punto Nro. 3 de la parte resolutive, en cuanto ordenó continuar la ejecución en contra de la empresa ejecutada por la suma de \$17.308.700 correspondiente a las raciones, indicando que no comparte la apreciación del despacho de que se trate de un subsidio en especie y al efecto explicó que la convención colectiva en las cláusulas 75 a 80 establece los requisitos

para acceder a ese beneficio y se refiere concretamente a que debe existir una venta, la cual nunca se concretó y así se evidencia de las pruebas recaudadas en el trámite. En ese sentido, considera que se está perdiendo de vista la literalidad del título que sirve de base a la ejecución, por lo que no debe haber lugar a interpretaciones sino a una revisión expresa de lo que dice la convención colectiva, por cuanto la ejecución se debe ceñir a la obligación clara, expresa y exigible que se pretende ejecutar.

A partir de estas consideraciones, insistió en que las raciones no constituyen un subsidio al cual pudiere acceder el trabajador.

También recurrió el numeral 4° de la parte resolutive de la providencia, al estimar que la entidad no debió ser condenada al pago de agencias en derecho.

Solicitó la revocatoria del auto en esos dos puntos.

#### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN 2 INSTANCIA:**

En la oportunidad procesal pertinente, el apoderado judicial de la empresa GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA (antigua ZANDOR CAPITAL COLOMBIA), presentó alegatos de conclusión. A través de los mismos, llamó la atención de este colegiado de la forma y términos en que la entidad ejecutada dio cumplimiento al reintegro del ejecutante; indicó que la orden de reintegro, en ningún momento debía hacerse extensiva a los conceptos convencionales que el demandante percibía para el año 2004 cuando fue despedido y destacó el pago por \$61.847.199 que la empresa hizo al trabajador al momento de reintegrarlo.

De otro lado, argumentó que al trabajador solo se le adeuda la suma de \$1.179.245, suma a la que considera debe ajustarse la orden de ejecución, a efecto de lo cual solicitó se active la póliza correspondiente y se sancione al actor por haber incurrido en afectación a los bienes del ejecutante.

Con relación a la ejecución económica por el valor de las raciones, solicitó se revoque la orden de continuar venta ejecución, al no haber concurrido un acto jurídico de venta entre las partes que justifique ese reconocimiento.

La parte ejecutante hizo lo propio y, procedió a allegar sustitución de poder a la Dra. Paula Andrea Pérez García con T.P. Nro. 261.942 del Consejo Superior de la Judicatura, quien presentó alegatos de conclusión. Esta sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente para representar los intereses de la parte ejecutante.

Mediante dichos alegatos, insistió en que el reintegro que llevó a cabo la empresa ejecutada constituyó un acto formal que se aleja de la forma en que debía cumplirse, al haberse establecido en la sentencia, que debía realizarse en las mismas condiciones laborales que se tenían para diciembre de 2004.

Se pregunta que como se puede entender que exista un reintegro, si el salario devengado para 2004 es superior al que devenga desde el año 2011. Insistió en la forma en que, a su juicio debe cumplirse con el reintegro, manifestando que debe conservarse el poder adquisitivo del salario que se devengaba para el momento del despido.

### **CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Desatará la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte ejecutante y ejecutada, en contra del auto del 30 de julio de 2021, dictado por la Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, a través del cual resolvió las excepciones dentro del presente proceso ejecutivo conexo y ordenó seguir adelante parcialmente con la ejecución, al tratarse de una providencia judicial que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, es recurrible en Apelación.

Se hace menester, a fin de verificar si la parte ejecutada cumplió a cabalidad con lo pertinente al reintegro al trabajador y haberle pagado la suma de \$59.178.359, suma equivalente a salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir entre el 21 de diciembre de 2004 al 12 de abril de 2011, hacer una comparación entre lo pagado y las obligaciones contenidas en el título ejecutivo que sirve de base a esta ejecución, para resolver lo pertinente a las excepciones propuestas por la parte ejecutada.

Ahora, el alcance de la obligación patronal que se ejecuta deriva de la existencia de un **título ejecutivo complejo**, en la medida que, además de la sentencia ordinaria de segunda instancia dictada el 17 de enero de 2011 por la entonces Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín<sup>1</sup> (que revocó la absolutoria que había proferido el entonces Juzgado 8º de Descongestión del Circuito de Medellín el día 31 de agosto de 2009), en este caso también existe un pronunciamiento de la H. Corte Constitucional, corporación que mediante sentencia de tutela (Sentencia T-954 del 15 de diciembre de 2011), aplicando el precedente establecido en las sentencias T-395 de 2001, T-406 de 2002 y T-401 de 2009, declaró la sustitución patronal entre las empresas FRONTINO GOLD MINES LIMITED y ZANDOR CAPITAL COLOMBIA, en favor del señor GUSTAVO ADOLFO CASTRILLÓN RESTREPO, lo que llevó a la Corte Constitucional a ordenar a ZANDOR CAPITAL COLOMBIA el reintegro del trabajador, pese a que las sentencias del proceso ordinario lo ordenaban pero frente a la empresa inicial FRONTINO GOLD MINES LIMITED.

Esta sala transcribe a continuación la *ratio decidendi* en que se apoyó la Corte Constitucional para dar vía libre a la posibilidad de que el juez de tutela declare la sustitución patronal para garantizar el cumplimiento de una orden de reintegro emitida en el marco de un proceso ordinario laboral:

*“Es procedente la acción de amparo constitucional cuando una autoridad pública o un particular se sustrae del cumplimiento de una decisión judicial de hacer (por ejemplo, una orden de reintegro), en la medida en que se vulnera el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Sin embargo, por regla general es improcedente cuando lo que se pretende es satisfacer obligaciones de dar (siempre y cuando no se evidencie un perjuicio irremediable), en la medida en que existen otros mecanismos idóneos para hacerlas efectivas (como por ejemplo un proceso ejecutivo*

*... esta sala constata que, para este caso específico existió una sustitución patronal y, en esa medida, es procedente el reintegro del señor Gustavo Adolfo Castrillón Restrepo para garantizar el cumplimiento efectivo de la*

---

<sup>1</sup> En la referida sentencia ordinaria de segunda instancia, la Sala Laboral de descongestión del Tribunal Superior de Medellín determinó que el trabajador había sido despedido sin tenerse en cuenta el procedimiento establecido en la Convención Colectiva de Trabajo de la cual era parte, por lo que ordenó su reintegro y “el pago de los salarios y las prestaciones sociales legales y extralegales que se generaron y se generen en todo el tiempo entre el día siguiente al del despido y el día del reintegro, sin solución de continuidad”.

*orden judicial y con ello la protección efectiva del derecho de acceso a la justicia... ”.*

Ahora, estando claro que la ejecución de la sentencia ordinaria podía adelantarse en contra de la empresa ZANDOR CAPITAL COLOMBIA, lo cual gravitó en torno a librar mandamiento de pago en contra de dicha compañía al interior del presente proceso ejecutivo conexo, **se hace menester revisar los términos en que debía operar el reintegro**, a efectos de desatar la apelación propuesta por ambas partes.

Para tal fin, es pertinente acudir a los términos de la sentencia ordinaria, como fuente de la ejecución. Se lee en la providencia dictada por la sala de descongestión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 17 de enero de 2011, lo siguiente:

*“... teniendo en cuenta que los procedimientos contemplados en la convención colectiva en el caso de sanciones disciplinarias se hicieron extensivos a los despidos y un despido es el que se hace con base en una justa causa o sin ella, y que aquellos trámites no fueron cumplidos por la parte accionada, deberá darse aplicación al artículo 115 del CST, teniendo por ineficaz el despido y como consecuencia lógica se ordenará el reintegro del trabajador al mismo cargo o a uno similar o mejor y el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre el día siguiente al del despido y el día del reintegro efectivo... ”.*

---

*“... tal y como se corrobora en el expediente, la actividad económica de la Frontino consistía en la minería en general, al tiempo que el objeto social de Zandor Capital comprende “inversión, prospección, construcción de infraestructuras, montaje explotación, beneficio, transformación, transporte, comercialización y exportación de todos o cualquiera de los minerales, hidrocarburos y energía eléctrica que se encuentren en el suelo y el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada.*

*Lo anterior indica que si bien los dos objetos sociales no son literalmente idénticos, en razón a que las exigencias de constitución de una sociedad Limitada y una Sociedad Anónima y los momentos en el tiempo en los que se crearon dichas sociedades producen cierto tipo de variaciones, si se puede evidenciar que se continúa en esencia con la actividad de la minería en general y específicamente con la explotación de oro en los mismos lugares en los que venía ejerciendo su actividad la empresa Frontino... ”.*

Teniendo claro los términos en que debió haberse cumplido el reintegro, pasa la sala a desatar los recursos de alzada formulados por las partes en contra del auto que resolvió las excepciones al interior de este proceso ejecutivo conexo:

Por razones lógicas, se hace menester desatar en primer lugar el disenso de la parte Ejecutante, de cuyos aspectos por los cuales difiere con la decisión de primera instancia se hace imperioso descartar aquel que pretende que la convención colectiva de trabajo que regía los destinos de los trabajadores y la empresa FRONTINO GOLD MINES LIMITED para diciembre de 2004 continúe produciendo efectos después del 1º de junio de 2011, fecha del reintegro. Ello por cuanto, la ejecución únicamente puede llevarse a cabo por los conceptos ordenados en el auto del 13 de octubre de 2015 a través del cual se libró mandamiento de pago en contra de la ejecutada. Es decir, si la parte ejecutante pretende que, en lo sucesivo al 1º de junio de 2011 se continúen causando prestaciones extralegales derivadas de la convención colectiva a cargo de ZANDOR CAPITAL COLOMBIA, deberá acudir a un proceso ordinario en el que debata ese aspecto, ya que el título ejecutivo que sirve de base a la ejecución solo tiene égida para el reintegro y que se paguen los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales desde el momento del despido hasta el reintegro, no a futuro.

Esta condición se hace imperiosa, como quiera que, tal y como este mismo colegiado lo definió en el auto del 13 de junio de 2017 (PDF 11 del expediente digital), a través del cual resolvió apelación contra el mandamiento de pago, *“el grado de semejanza que debe cumplirse entre la parte resolutive de la sentencia ordinaria y la orden judicial de ejecución en un proceso ejecutivo conexo laboral, debe ser absoluta”*.

En consecuencia, no existe ninguna razón jurídica para que las raciones contempladas en el artículo 75 de la Convención Colectiva de Trabajo se extiendan más allá del 1º de junio de 2011 (fecha del reintegro por ZANDOR COLOMBIA S.A.), en tanto las condiciones de prórroga automática de dicha convención no afectan en lo sucesivo la nueva realidad existente, determinadora del carácter de empleador que asumió ZANDOR COLOMBIA S.A., quien debe garantizar el mínimo de derecho y garantías de los trabajadores, con total independencia de que

asuma convencionalmente el pago de derechos en favor de los trabajadores, cuestión que hace imperioso un nuevo acuerdo de voluntades, y que, eminentemente no hace parte del título que sirve de base a esta ejecución.

Ahora, con relación a la oposición que la activa presentó en contra de la decisión, considerando que no debe darse por cumplida la obligación de reintegrar al trabajador, al no verificarse las mismas condiciones de que gozaba el actor al momento del despido, en tanto el salario que se tuvo en cuenta para liquidar los conceptos prestacionales por la A quo desconoce la prueba arrimada al proceso, esta sala observa lo siguiente:

Se encuentra acreditado que la compañía ZANDOR CAPITAL SA COLOMBIA reintegró al demandante el 1º de junio de 2011 y que, desde el 21 de diciembre de 2004 y hasta el 12 de abril de 2011, se le pagaron los siguientes conceptos:

- Por cesantías \$3.710.808.
- Por intereses a las cesantías \$429.025.
- Por primas de vacaciones \$2.226.484.
- Por primas de servicio \$3.710.808.
- Por salarios \$45.167.800.
- Por indemnización legal \$2.668.840.
- Por prima de antigüedad \$313.664.
- Por aguinaldo \$1.704.366.

De dichos pagos, además de la confesión realizada por el ejecutante, se encuentra probado en el PDF 3 del expediente (página 330), el detalle de dicha liquidación.

Para soportar su disenso con el salario base que se tuvo en cuenta para realizar esos pagos, la activa argumenta que a folio 45 de la demanda aparece el comprobante de pago Nro. 47868 de 2004, correspondiente a la década 34 del mes 12 del año 2004, donde por 56 horas trabajadas al actor se le canceló \$137.229, asimismo hace mención al comprobante Nro. 51304 de la década 35 por 54 horas laboradas, donde se le pagó \$156.833, y también se refieren las colillas de pago de



folios 894, contentiva de los comprobantes Nro. 17441 del mes 4 del año 2004 correspondiente a la década 11 por 80 horas laboradas donde se devengó \$208.867. También hizo referencia al folio 897 donde se encuentra la historia laboral expedida por COLPENSIONES, en la que se observa que el ingreso base de cotización para el año 2004 era por \$796.800 mensuales. También reprocha de la liquidación de la A quo, el que no hubiere actualizado el salario mes por mes para el mantenimiento del poder adquisitivo constante de la retribución laboral.

En cuanto a lo primero, **el salario base sobre el cual se deben liquidar todos los conceptos percibidos (legales y convencionales)**, para todos los efectos legales esta sala, con base en los dos comprobantes de pago correspondientes a las décadas 34 y 35 pagaderas al trabajador en diciembre de 2004, tendrá en cuenta un salario ordinario, para diciembre de 2004, por valor de \$588.124, resultante de hallar el valor hora laborada del trabajador.

Es preciso recordar que el título ejecutivo que sustenta este proceso es complejo, en la medida en que debe complementarse con otros documentos que constituyen plena prueba de los montos sobre los cuales debe versar la ejecución por el pago de los conceptos dejados de percibir mientras se estuvo cesante a causa del despido y hasta el momento del reintegro. **Esta característica le impone una carga probatoria al ejecutante, de acreditar el monto de los salarios que hubiere podido percibir entre diciembre de 2004 y abril de 2011, en el evento de que hubiere continuado vinculado a la empresa por esos años y no hubiere sido despedido.**

En el expediente se encuentra acreditado un salario mensual para diciembre de 2004 por valor de \$588.124, rubro que corresponde al salario ordinario, ya que no puede incluirse sobre remuneración por trabajo suplementario por unos años en los que no existió prestación efectiva del servicio, y por ende, no existió la posibilidad de servir horas extras.

En consideración al referido salario, es del caso tomar el mismo para el año 2004, y mantenerlo por los años 2005 y siguientes hasta que se advierta que tal monto resulta inferior al salario mínimo legal mensual para el respectivo año, que incluso es el que se presume devengaba el ejecutante al no acreditar el monto de

esos salarios en los años posteriores a 2004, punto que por demás, de tenerse en cuenta, afectaría en peor al único recurrente, el ejecutante, sobre tal tópico, por lo que, a partir de dicha fecha se tomará el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad para verificar tal situación.

**Operación aritmética de sostenimiento del salario en el tiempo con ajuste al mínimo anual:**

SALARIO PARA 2004: \$588.124	
	SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL
SALARIO PARA 2005: \$588.124.	\$381.500
SALARIO PARA 2006: \$588.124.	\$408.000
SALARIO PARA 2007: \$588.124.	\$433.700
SALARIO PARA 2008: \$588.124.	\$461.500
SALARIO PARA 2009: \$588.124.	\$496.900
SALARIO PARA 2010: \$588.124.	\$515.000
SALARIO PARA 2011: \$588.124.	\$535.600

En el caso de autos, es evidente que el salario que el trabajador percibía para 2004 es siempre superior al mínimo legal para cada anualidad.

Nótese cómo el salario básico que la compañía ZANDOR CAPITAL COLOMBIA tuvo en cuenta para afiliarse a la seguridad social en el año 2011 cuando llevó a cabo el reintegro del trabajador, fue la suma de \$588.000.

La Juez de primera instancia, tanto para verificar si la liquidación que se le pagó al trabajador cuando fue reintegrado por FRONTINO GOLD MINES LIMITED, como para calcular los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales que se le adeudaban al trabajador entre el 13 de abril y el 31 de mayo de 2011, tomó como salario base la suma de \$588.120, suma que es la que también avala la Sala conforme al análisis probatorio llevado a cabo en precedencia.

Con fundamento en dicho salario base, revisó el pago efectuado al trabajador hasta el 12 de abril de 2011, y condenó al saldo insoluto, comprendido hasta el 31 de mayo de 2011, día anterior a aquel en que fue reintegrado el trabajador.

Esta sala encuentra correctamente realizadas las operaciones aritméticas efectuadas por la juez de la ejecución, quien efectuó su análisis sobre los salarios, cesantías, intereses a las mismas, primas de servicio, prima de vacaciones, prima de antigüedad y aguinaldo, rubros sobre los cuales no existe ninguna controversia.

Los argumentos presentados por el apoderado judicial del ejecutante, a partir de los cuales hace hincapié en que la sentencia ordinaria no se ha cumplido, al no haberse llevado a cabo el reintegro en los términos correspondientes, resulta parcialmente cierta y por ello, la A quo fue consecuente con reliquidar el valor de lo mayormente adeudado, con la actualización correspondiente, a fin de que se pueda asumir que la sentencia ordinaria base de la ejecución fue cabalmente cumplida. Ahora, sus manifestaciones en torno a considerar que debe actualizarse la asignación básica adoptada por la A quo, no se accederá a ello, como quiera que dicha asignación con la cual se le pagaron al trabajador los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales se ajustó a lo devengado para diciembre 20 de 2004, que era ampliamente superior al mínimo, advirtiendo la Sala, como se resaltó, que no está acreditado en este proceso cuáles hubieren sido los salarios que hubiere podido devengar el ejecutante a partir de 2005, carga probatoria que, se insiste, era de éste.

Argumenta el impugnante que, si bien los jueces ordinarios no dijeron expresamente que estos salarios debían incrementarse, sería completamente determinable el valor de actualización salarial; sin embargo, adviértase cómo, precisamente de los comprobantes de pago referidos por el recurrente, que son la prueba documental por excelencia que tarifa el valor de la hora de trabajo, solo se acredita el salario para el 2004, no para los demás años, siendo éste siempre superior al mínimo para cada anualidad, y que ello se garantizó hasta la fecha del reintegro, junio de 2011.

En efecto, la parte ejecutante no cumplió con la carga probatorio de acreditar cual habría sido el salario que devengaría en la compañía por los años 2004 al 2011, en el evento de no haber sido despedido. Esta sala no puede acoger prueba distinta a las colillas de pago referenciadas por el mismo apoderado judicial del ejecutante, correspondientes a las décadas 24 y 25 de diciembre de 2004, de donde se puede extraer con certeza el valor de las horas pagadas para el momento en que ocurrió el despido. De pretender que se tenga un salario superior al adoptado a lo largo del transcurrir de los años 2004 a 2011, la parte ejecutante habría tenido qué probar que en la empresa existió una remuneración superior que se fue actualizando año a año, ya que no resulta ajustado a derecho simplemente suponer o fincar

presunciones en el sentido de que ese salario habría aumentado año a año, en tanto, siempre el acogido siempre fue superior al mínimo durante dichas calendas. Es importante, en punto de resolver el inconformismo del apoderado judicial del ejecutante con la ausencia de actualización del salario a lo largo de los años 2004 al 2011, destacar que no nos encontramos frente a un simple tema de actualización monetaria que amerite adoptar mecanismos de corrección e indexación por el transcurso del tiempo; en este asunto de lo que se trata es de resolver si el salario base adoptado es el correspondiente, y tal y como se argumentó, el salario se ajusta a derecho y siempre estuvo por encima del salario mínimo.

Ahora, el apoderado judicial del ejecutante, a partir de destacar unos efectos absolutos de la convención colectiva de trabajo que rigió entre los trabajadores de FRONTINO GOLD MINES LIMITED, pretende que se entienda la misma prorrogada en el tiempo. Dicho aspecto no es propio del título ejecutivo, la suerte de la convención colectiva es un asunto que no alcanza a ser determinado por la sentencia ordinaria y, por ende, escapa a la órbita de la ejecución.

Adviértase cómo el cumplimiento que se dio en favor del ejecutante entre el 21 de diciembre de 2004 y el 12 de abril de 2011, además de las sumas comprendidas hasta la fecha del reintegro efectivo que se está ordenando ejecutar, comprendió los conceptos convencionales prima de vacaciones, prima de antigüedad, aguinaldo, e incluso el equivalente monetario de las raciones alimentarias.

La discusión que plantea la activa en su recurso, de si luego de consolidado el reintegro debe o no continuarse aplicando la convención colectiva de trabajo, es un asunto que convoca las voluntades del empleador y de los trabajadores y que esta causa no puede definir, ya que la misma solo tiene por objeto verificar si se cumplió la sentencia, esto es, hasta el 1º de junio de 2011, fecha de la reinstalación en el empleo.

La activa se duele de que las raciones solo puedan ser contabilizadas hasta el año 2011 y, pretende que se obligue a la empresa ejecutada a mantener dicha prestación en favor de los trabajadores. No obstante, como se argumentó en precedencia, no resulta procedente hacer extensivos los efectos del título ejecutivo

más allá de su propia materialidad y alcance, que no fue otro que ordenar el pago de unos salarios y prestaciones sociales legales y convencionales con el reintegro efectivo (hasta el 1° de junio de 2011), que es lo que garantiza la orden de ejecución que la juez de primera instancia dio a proseguir, por los saldos insolutos de \$1.690.200 a título de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de percibir entre el despido el 21 de diciembre de 2004 y el reintegro (1° de junio de 2011) y por la suma de \$17.308.700, a título de raciones correspondientes al demandante, liquidadas entre el 21 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2011.

En punto al disenso de la activa con el auto recurrido, en cuanto no contabilizó ni monetizó las raciones más allá del 1° de junio de 2011, es preciso reseñar que extender la competencia del juez de la ejecución más allá del límite de cumplimiento tornaría en indeterminado, incierto e ilegalmente extendido en el tiempo el desarrollo de una relación laboral que, si bien fue sustituida, se rige en la actualidad por sus propias reglamentaciones.

Esta sala encuentra que el ejercicio de cálculo del equivalente de las raciones hasta el 1° de junio de 2011, cuantificado en la suma de 17.308.700, se ajusta completamente a derecho y se sustenta en el más adecuado de los dictámenes practicados al interior del proceso.

Ahora, en lo que tiene qué ver con el disenso de la parte ejecutante con el hecho de no haber incluido en el cálculo de las raciones los rubros correspondientes a los integrantes de su familia, esta sala encuentra que la conclusión de la A quo estuvo ajustada a derecho y que no le asiste razón al recurrente, ya que ello está relacionado con la carga probatoria y la obligación que la activa tenía de acreditar sus integrantes, los parentescos y todos los supuestos de hecho de la norma convencional. Ello no significa negarle a la convención colectiva los efectos que pueda tener o no tener en la actualidad. La prueba correspondiente a los integrantes de la familia, los lazos de parentesco y las condiciones familiares no se acreditan a partir de una simple certificación de la seguridad social, como lo pretende la parte ejecutante.

El apoderado judicial del ejecutante también destacó que, revisada la historia laboral en COLPENSIONES, la sociedad ZANDOR CAPITAL no acredita

pagos a la seguridad social del actor sino desde el año 2016, es decir que no existen pagos a la seguridad social desde diciembre de 2004 hasta enero de 2016, omisión que estima determinante para que se concluya que no existe un cumplimiento efectivo del reintegro ordenado en sede ordinaria. Al respecto, es preciso subrayar el hecho de que la sentencia ordinaria que sirve de base a la ejecución no ordenó el pago de la seguridad social de manera expresa; sin perjuicio de los valores que se puedan efectuar al respecto. Con todo, será ante el propio empleador directamente, o los organismos de la seguridad social que el actor deba llevar a cabo la actualización de su historia laboral. Lo cierto del caso, que surge de la literalidad del título ejecutivo, es que a través de este procedimiento no se puede ejecutar por el pago de aportes a la seguridad social en pensiones, lo cual no fue ordenado en la sentencia base de ejecución.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, queda resuelto el recurso de apelación de la parte ejecutante, sin que se encuentren procedentes ninguno de sus argumentos. Se confirmará la decisión de primera instancia.

En cuanto a los aspectos de disenso de la pasiva con el auto recurrido, es pertinente resolver en primer lugar el aspecto principal relacionado con la orden de continuar con la ejecución por la suma de **\$17.308.700**, a título de raciones correspondientes al demandante, liquidadas entre el 21 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2011. Considera la parte ejecutada que el mismo no constituye un subsidio en especie como lo argumentó la juez de primera instancia e hizo énfasis en que, lo que realmente existe es una venta. Bajo tales argumentos reclama que se exonere a la empresa de dicho pago.

Al respecto, esta sala no revocará la orden de continuar adelante con la ejecución por la suma de \$17. 308.700 correspondientes a las raciones calculadas entre diciembre de 2004 y mayo 31 de 2011, teniendo en cuenta que, resulta evidente que el soporte y finalidad del establecimiento de las cláusulas 75 a 80 de la Convención Colectiva, más que consagrar una venta, lo que contempla es un beneficio directo, sustentado a partir de un precio meramente simbólico de los productos de primera necesidad familiar. Ello justifica su reconocimiento, ya que

la parte resolutive de la sentencia ordinaria fue clara en indicar que el pago de los rubros causados entre el despido y el reintegro debía incluir todas las prestaciones convencionales, y las razones hacen parte de ellas.

Conforme a estas consideraciones, esta sala no encuentra procedente que se concluya que lo que existe es una venta y que, por ende, al no perfeccionarse materialmente la misma, no se esté causando este derecho.

Finalmente, en cuanto al inconformismo de la parte ejecutada con la condena en costas procesales en el proceso ejecutivo, no existe ninguna justificación para que se omita su imposición, ya que se cumple el criterio objetivo del artículo 365 del Código General del Proceso, en cuanto se ha continuado seguir con la ejecución por los rubros adeudados.

De conformidad a las anteriores consideraciones, esta sala concluye que la juez de primera instancia fue consecuente con el alcance del título ejecutivo y su decisión de acoger el dictamen que mejor formó su convencimiento y del que supo dar cuenta en grado de convicción en su argumentación, principalmente por estar ajustado a las cifras oficiales obtenidas de los sitios oficiales y actualizados, sobre los valores de los productos de la canasta familiar. En consecuencia, será **CONFIRMADO** íntegramente el auto recurrido en apelación por ambas partes.

Sin costas en esta instancia, en tanto las mismas no se han causado.

## **D E C I S I Ó N**

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

**TERCERO:** En su debida oportunidad devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**CUARTO:** Notifíquese lo resuelto a las partes por **ESTADOS**.

**Los magistrados**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 191 del 24 de octubre de 2022.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>